



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
17 de octubre de 2013
Español
Original: francés

Comité contra la Tortura

48º período de sesiones

Acta resumida de la 1073ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 16 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención (*continuación*)

Informe inicial de Rwanda (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención (tema 7 del programa) *(continuación)*

Informe inicial de Rwanda (CAT/C/RWA/1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Rwanda toma asiento a la Mesa del Comité.*

2. **La Sra. Nyirahabimana** (Rwanda) reitera la invitación cursada al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que visite su país. En respuesta a las preguntas sobre los tribunales *gacaca*, explica que, tras el genocidio de 1994, que se cobró la vida de más de un millón de personas, se detuvo y encarceló a más de 120.000 personas en los diferentes centros de detención del país. A ello se añaden las personas sospechosas de haber cometido esos crímenes pero que no fueron encarceladas. El país estaba devastado; el tejido social, destruido; y los autores del genocidio seguían impunes. En un principio, Rwanda recurrió a la justicia ordinaria para juzgar a estas personas; entre 1996 y 2001, se examinaron 6.000 casos por esa vía. A este ritmo, habría hecho falta más de un siglo para juzgar a todas las personas detenidas, por no hablar de las personas sospechosas de haber participado en el genocidio que seguían en libertad en el país o en el extranjero. Por eso, se decidió recurrir al sistema de tribunales *gacaca*, fruto de una antigua práctica por la que los miembros de una comunidad se reunían y se sentaban sobre la hierba para debatir y resolver sus discrepancias. Todos habían sido testigos del genocidio, por lo que la comunidad en su conjunto se implicó en este proceso para que todos pudieran expresarse y arrojar luz sobre los hechos. No se trataba únicamente de agilizar la administración de la justicia, sino también de favorecer la reconciliación y cicatrizar las heridas de las comunidades restableciendo la confianza entre sus miembros. Son las propias comunidades las que designaron de entre sus miembros a personas íntegras para que ejercieran las funciones de juez. Las personas acusadas de cometer actos de genocidio fueron repartidas en distintas categorías. El juicio a las personas acusadas de haber planificado, organizado o alentado el genocidio y a los autores de actos de violencia sexual, es decir, al 10% de los acusados, se reservó a la justicia ordinaria, mientras que los tribunales *gacaca* conocieron de los casos de los otros acusados. Estos tribunales estudiaron 1.500.000 casos y dictaron 38.000 condenas por actos de genocidio. Las personas que no fueron condenadas se reintegraron en la comunidad. Una vez que cumplan el cometido encomendado, los tribunales *gacaca* serán disueltos el 17 de junio de 2012. La población de Rwanda considera que han hecho justicia y que el balance de su labor es muy positivo. En lo que respecta al Tribunal Penal Internacional para Rwanda, las autoridades consideran que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del derecho penal internacional y que sus decisiones conforman una importante jurisprudencia, si bien no ha podido tratar el problema del genocidio en su conjunto.

3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rwanda fue creada en 1999 y acreditada con la categoría A en 2002. Las críticas recientes al procedimiento de nombramiento de sus miembros han sorprendido en cierto modo a las autoridades porque dicho procedimiento sigue siendo el mismo que existía cuando se le confirió a la Comisión la categoría A. El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos había indicado al respecto que, si bien los principios por los que se regía el nombramiento de los miembros de la Comisión eran satisfactorios, especialmente los que velaban por su pluralismo y representatividad, el hecho de que estos principios no estuvieran inscritos en la ley representaba un problema. La Sra. Nyirahabimana explica en este sentido que el nombramiento de los miembros de la Comisión discurre en dos fases: el Gobierno propone una candidatura, que debe ser refrendada posteriormente por el Senado, que vela por que se respete el principio

constitucional de la representatividad. En cualquier caso, aun si ya se aplican los principios que el Subcomité de Acreditación desearía ver inscritos en la legislación ruandesa, las autoridades están más que dispuestas a modificar la legislación en esa dirección. La otra crítica a la Comisión gira en torno a su presunta falta de independencia financiera, especialmente el hecho de que el presupuesto propuesto por la Comisión se someta a la aprobación del Gobierno. Las autoridades del país no alcanzan a comprender completamente qué se les reprocha, puesto que la Comisión no dispone de ingresos propios, por lo que el Gobierno debe garantizar su financiación, salvo que pudiera depender de un donante. No obstante, estudiarán las prácticas de otros países y desearían recibir asesoramiento al respecto. Una vez más, el Gobierno está dispuesto a encontrar una solución satisfactoria.

4. Se invitó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) relevantes a formular sus observaciones en la preparación del informe presentado al Comité. La invitación se cursó a un organismo de coordinación, que dirigía a numerosas organizaciones pequeñas, lo que explica que algunas de ellas tengan la impresión de no haber participado en este proceso. El Gobierno ha aprendido la lección y, en el futuro, invitará individualmente a cada ONG, también en el proceso de consultas que iniciará para dar cumplimiento a las recomendaciones que formule el Comité.

5. En lo que respecta a la cuestión de la inscripción anual de las ONG, la Sra. Nyirahabimana señala que, de acuerdo con la nueva legislación, una vez registradas, las ONG nacionales no tienen que renovar dicha inscripción, mientras que la inscripción de las ONG internacionales es válida durante cinco años. El Gobierno de Rwanda considera a las ONG socios irremplazables; les reconoce el papel que han desempeñado y siguen desempeñando en la recuperación del país y agradece su gran labor en todos los ámbitos. Reitera su voluntad de cooperar con ellas y destaca que, si bien puede haber discrepancias de opiniones entre las organizaciones y las autoridades en algunas cuestiones, el espíritu de colaboración que prevalece entre las dos partes siempre permite encontrar un espacio para el entendimiento.

6. El Gobierno hace todo lo posible por encontrar a las personas desaparecidas. Algunos casos se remontan a 1992, época en la que el Gobierno que cometió el genocidio estaba en el poder. Las autoridades de Rwanda publican periódicamente informes sobre sus actuaciones para resolver este problema. El país ha perdido a tantas personas y hay tantas familias reducidas a un solo miembro que cada vida es preciosa y cada desaparición representa una pérdida irremediable. A la luz de su reciente historia, los ruandeses confieren un gran valor a la vida y desean por encima de todo que no desaparezca nadie. El Gobierno seguirá esforzándose en encontrar a las personas desaparecidas y a tal fin solicitará la cooperación de la comunidad internacional.

7. Ante las críticas vertidas por ONG y medios de comunicación sobre la función del Consejo Superior de Medios de Comunicación, tras consultar a las partes interesadas, las autoridades decidieron modificar algunas disposiciones de la legislación sobre los medios de comunicación. El Consejo Superior de Medios de Comunicación ya no se encargará de regular las actividades de los medios de comunicación, a los que se ha pedido que se autorregulen. Asimismo, estos participarán en la elaboración de la ley relativa al Código deontológico de los medios de comunicación. Por último, el Senado estudia en la actualidad el proyecto de ley de acceso a la información, que facilitará enormemente el acceso a la información en manos de los poderes públicos.

8. **El Sr. Rusanganwa** (Rwanda) afirma que el nuevo Código Penal, que entrará en vigor a finales de mayo de 2012, introducirá una definición de la tortura con todos los elementos de la definición enunciada en la Convención. Por lo que respecta a la pena mínima de seis meses de encarcelamiento por cometer actos de tortura, explica que la intención del legislador era establecer una gradación en los actos de tortura y fijar penas

proporcionales a la gravedad del acto perpetrado. Así, negarse a dar agua a una persona detenida durante un determinado tiempo no reviste la misma gravedad que infligirle lesiones corporales. Sin embargo, si se constatará que esta pena mínima no es lo suficientemente disuasiva, se podría revisar. Por otra parte, al tipificarse la tortura como delito, se podrá solventar el problema de falta de estadísticas al respecto. Por lo tanto, los próximos informes periódicos de Rwanda aportarán datos precisos sobre los juicios por actos de tortura.

9. Existen disposiciones legislativas para proteger a las personas amenazadas con la devolución o la extradición, y el Parlamento está a punto de aprobar un nuevo proyecto de ley sobre la extradición. El procedimiento permite a la persona que impugna la decisión de extradición adoptada por la administración interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. La ejecución de la decisión se suspende mientras se examina el recurso. Así pues, se ofrecen todas las garantías de la necesaria protección de las personas extraditadas desde Rwanda o a Rwanda procedentes de otro país.

10. Rwanda es uno de los países en los que se protegen mejor los derechos de la mujer, y, en los últimos tiempos, se han registrado muchos avances en este ámbito. El país ha promulgado en particular varias leyes en favor de la mujer (Ley sobre la prevención y el castigo de la violencia contra la mujer, Ley sobre la mutilación genital femenina, Ley de acceso de la mujer al crédito, Ley de posesión de la tierra que garantiza a la mujer el derecho a poseer tierras y Ley de derechos sucesorios). Asimismo, la Estrategia de lucha contra la pobreza apunta a mejorar las condiciones de vida de las mujeres para fomentar su autonomía.

11. Rwanda ha ratificado los principales instrumentos internacionales de protección del niño. El Gobierno ha lanzado un programa nacional de ayuda a los niños huérfanos y vulnerables y ha adoptado leyes que velan por su protección, en particular una ley sobre el trabajo infantil. Asimismo, Rwanda ha constituido una comisión encargada de proteger los derechos del niño. Las autoridades hacen hincapié en los derechos de las niñas, fundamentalmente en el ámbito de la educación, gratuita para todos hasta los 12 años.

12. La trata de personas es un delito en virtud no solo de los instrumentos internacionales ratificados por Rwanda, en particular el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, sino también del nuevo Código Penal, que define este delito y endurece las penas para los autores. Rwanda ha iniciado el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, gracias al cual las personas podrán próximamente dirigir al Comité de Derechos Humanos quejas en todos los ámbitos, también contra los actos de tortura. En breve, se ratificará el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

13. **La Sra. Gahonzire** (Rwanda) manifiesta que el Gobierno de Rwanda ha lanzado, en el marco del plan "Visión 2020", un programa que pretende mejorar las infraestructuras penitenciarias y las condiciones de detención en el plazo señalado. En los últimos años, se han cerrado tres prisiones, se han construido otras dos y se han remodelado muchas otras. Las autoridades del país prevén construir entre siete y nueve centros correccionales nuevos de aquí a 2017. En la actualidad, hay en Rwanda unas 57.000 personas detenidas, de las que tres cuartas partes están acusadas de participar en el genocidio. Se recluye por separado a hombres y mujeres, al igual que a adultos y menores. La tasa de ocupación de los centros penitenciarios ha disminuido significativamente y se sitúa hoy en el 105%. La cifra de 149% citada anteriormente corresponde a 2003, año en que había en el país más de 120.000 personas detenidas; ahora bien, posteriormente, el Presidente de la República amnistió a más de 60.000 personas detenidas y la tasa de ocupación descendió al 113%. En 2011, 1.667 personas fueron puestas en libertad condicional. Paralelamente, la administración se ha esforzado en reforzar la capacidad del personal penitenciario para mejorar las condiciones de detención. Todas estas medidas han permitido cumplir con las normas

internacionales en materia de medidas de reinserción, visitas, servicios médicos, formación y seguridad, y las autoridades siguen trabajando para reducir todavía más la población penitenciaria.

14. En el seno de la policía nacional, se ha hecho hincapié en la prevención y la detección de la tortura, así como en la investigación de estos casos. Se han contratado médicos forenses a tal fin, si bien siguen siendo insuficientes. Los miembros del personal judicial, en particular los fiscales, han recibido formación para detectar y combatir la tortura. El país cuenta con una veintena de centros de ayuda a las víctimas.

15. Los servicios a la comunidad se inscriben en el marco de un sistema de penas sustitutorias que permite a los condenados evitar la encarcelación si realizan trabajos que benefician al conjunto de la comunidad, lo que contribuye a descongestionar las prisiones.

16. Las autoridades han lanzado campañas de lucha contra el fenómeno de la violencia doméstica. El elevado número de casos denunciados no significa que haya aumentado el número total de delitos.

17. En junio de 2011, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda resolvió devolver a un sospechoso a la justicia ruandesa. El sospechoso, Sr. Jean Uwinkindi, se encuentra detenido en la prisión de Kigali y comparecerá ante un tribunal ruandés en agosto de 2012. Otras personas acusadas por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda se hallan en paradero desconocido y serán trasladados a Rwanda para afrontar juicio en cuanto se les detenga. En enero de 2012, el Canadá extraditó a Rwanda al Sr. Léon Mugesera, ciudadano ruandés acusado de haber participado en el genocidio. En estos momentos, se encuentra detenido en la prisión de Kigali, que satisface las normas propugnadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo de Noruega aprobaron recientemente el traslado a Rwanda de otros dos sospechosos.

18. En respuesta a una pregunta sobre la detención de opositores políticos, la Sra. Gahonzire precisa que el Sr. Victorie Ngabire se encuentra en buen estado de salud, que se alimenta con normalidad y que el tribunal se pronunciará sobre su caso en julio de 2012. El Sr. Bernard Ntaganda cumple una pena de cuatro años de encarcelamiento; se encuentra bien y puede recibir visitas. En Rwanda no se ha detenido a nadie en secreto, y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está invitado a desplazarse al país para tener la más absoluta certeza de estos hechos.

19. Rwanda es actualmente el mayor contribuyente de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU en el Sudán. Además, la policía ruandesa apoya a la población sudanesa y a las víctimas del terremoto de Haití. Cabe igualmente señalar que los métodos de lucha contra la tortura inscritos en el marco de actividades de la policía de proximidad suponen un ejemplo para toda África.

20. **El Presidente** informa a la delegación de Rwanda de que transmitirá su invitación al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

21. **El Sr. Bruni** (Relator para el país) agradece a la delegación la riqueza de la información facilitada. Toma nota con satisfacción de que se invitará a todas las ONG a participar en la elaboración de los informes del Estado parte y en la aplicación de las recomendaciones. El Sr. Bruni afirma desconocer la existencia de un proyecto de ley que defina la tortura como un delito distinto y que castigue los sufrimientos mentales causados por la tortura. Señala que el artículo 205 del Código Penal en vigor menciona únicamente los sufrimientos físicos ocasionados por la tortura. Por otra parte, quisiera saber si el Tribunal Supremo tiene en cuenta el riesgo de sufrir tortura al que se expone un demandante antes de pronunciarse sobre su extradición, su expulsión o su no devolución. Invita igualmente a la delegación a informar al Comité y demás instancias internacionales

pertinentes del estado en que se encuentra la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la aplicación de las disposiciones del artículo 22 de la Convención. Desea saber además cuántos funcionarios públicos han sido condenados por la vía penal por casos de tortura desde 2009. Teniendo presente que el plazo legal de prescripción de la tortura no se aplica a los actos de tortura cometidos durante el genocidio, pide a la delegación que precise qué autoridad dictamina que un acto de tortura está vinculado o no al genocidio y con arreglo a qué procedimiento. Asimismo, el Sr. Bruni solicita los detalles de las denuncias bien fundamentadas de 18 casos de tortura y desea saber igualmente si se ha elaborado una lista de los lugares de detención oficiales, lo que permitiría evitar las detenciones secretas, y qué sanciones se prevén, si corresponde. Toma nota con satisfacción de la reducción de la población penitenciaria, pero observa que, según las cifras fiables recabadas en el marco del Examen Periódico Universal, la tasa de hacinamiento de las prisiones era en 2010 del 149% y no del 105%. Solicita que se precise la situación de los 400 niños menores de 3 años que viven en prisión con sus madres en condiciones deplorables. El Sr. Bruni quisiera tener asimismo más información sobre las funciones del Servicio Nacional de Prisiones y del servicio correccional y saber si el programa recientemente elaborado por el Servicio Nacional de Prisiones para mejorar la situación de los reclusos ha permitido eliminar los obstáculos que impedían mejorar las condiciones de encarcelamiento. Toma nota de la existencia de un servicio correccional como pena sustitutiva de la privación de libertad y pregunta cuánto duran las penas y de qué viven los condenados, en la medida en que no reciben ni salarios ni ningún tipo de asignación. Por último, el Sr. Bruni solicita información sobre los mecanismos que permiten a las personas desobedecer la orden de un superior que implique cometer un acto de tortura o un acto que se perciba como tal.

22. **La Sra. Sveaass** (Correlatora para el país) pregunta cuántos casos seguirán en espera de juicio en el momento en que se disuelvan los tribunales *gacaca* en junio de 2012. Desea saber también si es verdad que se han transferido los casos de categoría I (los delitos más graves) a estos tribunales y cuántas personas pertenecientes a esta categoría están a la espera de juicio. Lo importante es que la justicia siga su curso a pesar de las demoras. Felicita a Rwanda por haber hecho hincapié en la lucha contra la violencia sexista y pregunta cuántas condenas han dictado los tribunales en casos de violación.

23. La Sra. Sveaass señala que ha llegado al Comité la inquietud de la sociedad civil ruandesa, que desea poder realizar su labor sin sufrir amenazas, y solicita información más precisa sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

24. La oradora espera que las investigaciones sobre las personas desaparecidas den sus frutos. Por otra parte, considera que la acusación vertida contra el Sr. Bernard Ntaganda, preso político, no es clara y afirma que toda privación de libertad sin justificar es dramática. Observa que el exministro Charles Ntakirutinka fue liberado en 2012 después de diez años en prisión y pregunta qué imputación justificaba esta larga pena de encarcelamiento. Pide también al Estado parte que indique si se han implantado mecanismos de denuncia de malos tratos o actos de tortura y, de ser así, que describa el procedimiento que deben seguir los denunciantes y el apoyo al que tienen derecho.

25. La Sra. Sveaass pregunta si los órganos de inspección y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen derecho a visitar los lugares de detención sin aviso previo y de entrevistarse en privado con las personas detenidas. También sería interesante saber qué tasa de reincidencia registran las personas que siguen programas de servicios a la comunidad y si participan en ellos las personas acusadas por delitos vinculados con el genocidio.

26. La oradora cita un informe del Ministerio de Justicia de Rwanda en colaboración con el UNICEF, según el cual se recluye en los mismos lugares a niños con necesidades

diversas, tales como menores delincuentes y niños con discapacidad, y pregunta si los niños internados en el centro de rehabilitación de menores creado en el este del país se rigen por la justicia juvenil o por los servicios de la seguridad social. Desea igualmente saber si los 400 niños de mujeres detenidas que viven con sus madres se encuentran en centros de rehabilitación o gozan en prisión de condiciones adaptadas a sus necesidades.

27. La Sra. Sveaass señala que, al parecer, las leyes en vigor excluyen toda medida de rehabilitación o de indemnización en caso de sufrimientos mentales o psicológicos. Asimismo, parece que la reparación depende más de que el acusado admita su culpabilidad que de la evaluación de las necesidades de la víctima. La Sra. Sveaass desearía que la delegación aportara más información sobre las medidas de reparación destinadas a las numerosas mujeres víctimas de violación o de actos de violencia sexual durante el genocidio.

28. En relación con los reproches dirigidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rwanda por su falta de independencia, la oradora afirma que la situación debería mejorar si la Comisión da cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Penal Internacional y colabora con el Parlamento.

29. **La Sra. Belmir** observa que en el informe del Estado parte se afirma que los actos de tortura prescriben, a excepción de los asesinatos y las violaciones de los derechos del niño. Pregunta si los tribunales *gacaca* serían competentes para juzgar a los niños detenidos que en el momento del genocidio eran menores de 18 años y siguen a la espera de juicio. Elogia los importantes avances que han supuesto estos tribunales, pero destaca que deben solventar numerosas deficiencias, tales como la protección de los acusados, la formación de los jueces y la corrupción, problemas que afectan igualmente a los tribunales ordinarios. Por último, pide a la delegación que describa la situación en la que se encuentran las personas vulnerables detenidas en condiciones difíciles en centros no oficiales.

30. **El Sr. Gaye** afirma que las disposiciones legislativas sobre la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura u otras formas de violencia son controvertidas porque al parecer no se aplican en la práctica. Recuerda que solicitó a la delegación del Estado parte que enumerara las decisiones judiciales que versan expresamente sobre esta cuestión y que aún no ha recibido respuesta alguna.

31. En relación con la indemnización de las víctimas de delitos cometidos por funcionarios, en el párrafo 110 del informe se indica que el Estado ruandés puede ser responsable por la vía civil por los actos cometidos por sus agentes en el desempeño de sus funciones y puede participar en la indemnización de las víctimas. El Sr. Gaye dice que "puede participar" no es una formulación demasiado contundente. Observa además que el Estado no parece asumir su responsabilidad en la práctica y solicita más información sobre el funcionamiento concreto de este sistema. Desearía saber especialmente si el Estado puede emprender acciones legales contra el agente culpable.

32. **La Sra. Gaer** dice que Rwanda ha demostrado respetar sus obligaciones internacionales, especialmente al acoger a unos 10.000 refugiados de la República Democrática del Congo. Pregunta a la delegación cuántas personas cree que estuvieron implicadas en el genocidio en Rwanda, cuántas no han sido aún juzgadas y cuántas se encuentran en el extranjero. Teniendo en cuenta que los tribunales *gacaca* han juzgado a 60.000 personas en los cinco primeros años a razón de 12.000 personas al año, si hicieran falta cien años para juzgar a todos los sospechosos, se alcanzaría la cifra de 1,2 millones de personas.

33. En vista de que la delegación desmiente las denuncias que apuntan a la existencia de centros de detención secretos, la Sra. Gaer le pregunta si está en condiciones de facilitar información sobre los 45 casos denunciados por Amnistía Internacional y autorizar a esta organización para que acuda en breve a Rwanda. Le pide igualmente que indique dónde se

encuentran todos los presos de los que ha hablado el Sr. Bruni y que aporte al Comité información precisa sobre la situación de las personas desaparecidas.

34. **El Sr. Mariño Menéndez** toma nota de la aprobación de una ley que prohíbe el trabajo infantil, pero afirma que la Organización Internacional del Trabajo denunció que en 2010 había 352.000 niños de entre 6 y 17 años que trabajaban en Rwanda. Pregunta si se han implantado programas humanitarios y legislativos para poner fin al trabajo infantil y garantizar la aplicación de la nueva ley, especialmente en el marco de la instauración de la escolarización obligatoria.

35. Rwanda aprobará en breve una ley de extradición, una ley de refugiados, una ley de inmigración y emigración y quizás una ley de extranjería. Habida cuenta de que el proyecto de ley de inmigración y emigración autoriza al Presidente de Rwanda a resolver administrativamente la expulsión de un extranjero por razones de seguridad, el Sr. Mariño Menéndez pregunta si dicha persona puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.

36. El artículo 190 de la Constitución estipula que "[l]os tratados o acuerdos debidamente ratificados o adoptados tendrán, desde su publicación oficial, precedencia con respecto a las leyes orgánicas y ordinarias, siempre que sean aplicados por la otra parte". El Sr. Mariño Menéndez dice que el principio de reciprocidad no funciona en el caso de los instrumentos de derechos humanos, puesto que estos protegen intereses colectivos y comunes. Pregunta cómo interpreta Rwanda las disposiciones del artículo 190.

37. **El Sr. Wang Xuexian** pide a la delegación que presente información por escrito sobre los tribunales *gacaca*, cuya eficacia le ha fascinado.

38. **La Sra. Nyirahabimana** (Rwanda) afirma que en el antiguo Código Penal la tortura no era considerada un delito propiamente dicho sino una circunstancia agravante, situación que no se mantiene en el nuevo Código Penal. El Parlamento estudia un proyecto de ley sobre el sistema que se establecerá tras la disolución de los tribunales *gacaca*. Las personas a las que todavía no se ha juzgado serán remitidas a los tribunales ordinarios, que ya han tratado casos de la categoría 1.

39. Vistos los diferentes grados de implicación de los culpables, Rwanda ha elegido no transformar el país en una prisión sino instaurar un sistema de categorías. Así, no todos los autores de delitos han comparecido ante los tribunales *gacaca*, sino que algunos lo han hecho ante los tribunales ordinarios. Los autores de delitos menores perpetrados contra bienes han sido condenados a penas leves, en particular a servicios a la comunidad. Se facilitarán al Comité estadísticas detalladas sobre los tribunales *gacaca* (número de jueces, vistas, etc.), que vendrán acompañadas de documentos transmitidos al Comité contra la Desaparición Forzada, en particular el último informe de Rwanda al respecto. Se están investigando los casos de las personas desaparecidas y Rwanda colabora a tal fin con el conjunto de las partes interesadas.

40. El Gobierno de Rwanda se esfuerza en colaborar con las ONG y facilitar su trabajo, pero se deben respetar las normas internacionales y los procedimientos internos sobre la entrada al país.

41. En relación con los presos políticos, nadie está por encima de la ley, independientemente de que se trate de miembros de los partidos políticos, de medios de comunicación o de ONG. Los casos mencionados son objeto de procedimientos oficiales y el titular del mandato de procedimiento especial de la ONG en cuestión tuvo acceso a los sumarios. Algunas personas reconocieron su culpabilidad pero siguen atacando al Gobierno. En ningún caso se tolerará la negación del genocidio. Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo, es importante que la comunidad internacional —por qué no por medio de un órgano independiente como el Comité contra la Tortura— examine la situación con el fin de poder resolver estos casos de una vez por todas. Si se concluye que se han cometido

errores, el Gobierno hará cuanto esté en su mano por corregirlos. Sin embargo, es importante que los informes sobre los casos en cuestión sean elaborados por personas sobre el terreno conocedoras de la situación.

42. **El Sr. Rusanganwa** (Rwanda) dice que el nuevo Código Penal contiene una definición de la tortura que tiene en cuenta el sufrimiento mental. En cuanto al fundamento jurídico de la extradición y la devolución, Rwanda actúa conforme a su legislación nacional y a los instrumentos internacionales que ha ratificado, que prohíben la extradición a países en los que la persona extraditada puede ser condenada a la pena capital. Asimismo, la Ley sobre la pena de muerte dispone que, en caso de que Rwanda solicite la extradición, las autoridades ruandesas deben dar al Estado solicitado las garantías de que la persona extraditada no correrá riesgo de ser sometida ni a torturas ni a la pena de muerte.

43. En legislación nacional, no se puede invocar la orden de un superior para justificar el acto de un subordinado cuando se ha demostrado que dicho acto es ilegal.

44. En Rwanda, el procedimiento de ratificación es largo. Se inicia a partir de una proposición dirigida a las autoridades competentes. Una vez que se han estudiado los elementos técnicos de la proposición, esta se transmite al Consejo de Ministros que, tras su aprobación, se remite al Parlamento, que aprueba una ley de autorización de la ratificación, y el Presidente puede entonces sancionar un decreto de ratificación. El proyecto de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que actualmente estudia el Consejo de Ministros, se remitirá en breve al Parlamento.

45. En lo que se refiere a la reciprocidad, la Constitución de Rwanda la prevé únicamente en el caso de los tratados bilaterales entre Estados, que surten efecto a condición de que la otra parte los aplique. La reciprocidad no afecta a los derechos individuales garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

46. A diferencia de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en virtud de la cual el genocidio es un delito imprescriptible, la Convención contra la Tortura no prevé la imprescriptibilidad del delito de tortura y, por lo tanto, permite que cada Estado elija su régimen. Rwanda deberá decidir si los actos de tortura que no se hubieren cometido durante el genocidio son delitos imprescriptibles.

47. **La Sra. Gahonzire** (Rwanda) dice que las personas acusadas de violencia sexista han sido condenadas a penas más severas, que llegan incluso a la cadena perpetua. El Gobierno ha adoptado medidas destinadas a desincentivar este tipo de violencia: los casos se juzgan donde se haya cometido el delito y son objeto de cobertura mediática, y los acusados son a menudo condenados a las máximas penas.

48. El sistema judicial de Rwanda prevé que quien haya cometido un delito contra la comunidad debe repararla, en especial mediante servicios a la comunidad. No obstante, no se puede esperar que la persona condenada reciba una remuneración, que sería injusto a ojos de la víctima. Ahora bien, se le concede una ayuda, sufragada con el presupuesto del distrito en cuestión. Los servicios a la comunidad fueron objeto de un estudio que demuestra que el sistema parece funcionar satisfactoriamente. Las personas que participaron en el genocidio sin cometer delitos graves son condenadas a prestar servicios a la comunidad.

49. Se dan casos de niños menores de 3 años que acompañan a sus madres que han sido condenadas. Las autoridades han adoptado medidas para permitir que no se separen y para hacerles llegar leche y otros alimentos, gracias a un programa especial. Una vez que el niño cumple 3 años, el Gobierno se pone en contacto con las autoridades locales y se entrega el menor al cuidado de familiares. El Consejo Nacional de la Infancia, dependiente del Ministerio de Género, se encarga del seguimiento.

50. Hasta octubre de 2009, un departamento del Ministerio del Interior era responsable de las prisiones. El 14 de octubre de 2009, el Gobierno creó un servicio nacional autónomo encargado de la administración penitenciaria cuya principal misión es velar por que las prisiones se ajusten a las normas internacionales y luchar contra el hacinamiento en las cárceles, gracias a fondos públicos asignados a tal efecto.

51. El 25 de julio de 2011, en aras de la racionalización, el servicio nacional encargado de la administración penitenciaria se fusionó con el departamento a cargo de los servicios a la comunidad. El organismo resultante sigue dependiendo del Ministerio del Interior. Esta fusión ha permitido modernizar el régimen penitenciario y disponer de mejores instalaciones, así como mejorar la contratación y la formación, lo que redundará en una profesionalización del personal penitenciario. Gracias a los acuerdos suscritos con organizaciones internacionales, sigue en marcha el proceso de modernización.

52. Las personas que han sufrido actos de tortura son víctimas. El Gobierno se esfuerza por evitar una doble victimización encomendando a especialistas que les presten apoyo durante la investigación. La policía nacional ha mejorado sensiblemente su labor en este ámbito.

53. El centro de Iwawa no depende del Ministerio del Interior sino del Ministerio de la Juventud. Se interna a jóvenes delincuentes, la mayor parte huérfanos, con el fin de que adquieran las competencias necesarias para vivir en sociedad.

54. **El Presidente** agradece a la delegación de Rwanda la información suplementaria que ha aportado, que servirá para evaluar la situación del país. Le recuerda que debe enviar los documentos que propone transmitir al Comité antes de que acabe la semana.

55. **La Sra. Nyirahabimana** (Rwanda) da las gracias a los miembros del Comité y les asegura que se tendrán debidamente en cuenta sus observaciones con el fin de mejorar los procedimientos implantados y preparar las reformas necesarias.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.